JUZGADO UNDÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Medellín, mayo cinco de dos mil veintitrés

Proceso	Verbal
Demandante	Jenny del Socorro Sánchez Montoya
Demandado	DH Inversiones S. A. S. y otros
Radicado	05001-31-03-011-2021-00013-00
Decisión	Repone parcialmente; y aplaza audiencia inicial.

Se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la providencia del diez de abril del año corriente, así como las peticiones de aplazamiento de la audiencia inicial que aquella fijó.

RECURSOS DE REPOSICIÓN

1. Antecedentes. Por el auto recurrido se programó fecha de audiencia inicial para el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Estimó prudente el Juzgado agilizar el decreto de ciertas pruebas pedidas por la parte demandante bajo el rótulo de «*prueba por informe*», separándose de su titulación e interpretando, en estrictez, que lo pedido correspondía a una prueba de exhibición. Más particularmente, llamó a los demandados a exhibir sus estados financieros, declaraciones de renta y libros de contabilidad relativos a los años de dos mil diecisiete a dos mil veinte.

2. Recurso del Sr. Julio César Restrepo y Pafares S. A. S. En memorial del doce de abril, ampliado por otro del día siguiente, el apoderado de dichos demandados recurrió en reposición contra el auto descrito en el acápite precedente.

Insistió en que el Juzgado debía analizar la configuración de las causales alegadas de sentencia anticipada, sustancialmente fundadas en el contrato transaccional de veintiocho de julio de dos mil diecisiete y el subsecuente desistimiento del proceso de declaración de unión marital de hecho. Con precisión, refirió que la demandante no es acreedora del señor César Restrepo ni podría encausarlo por otra liquidación patrimonial, pues están prescritas las acciones del artículo 8 de la Ley 54 de 1990.

Con respecto del decreto de pruebas, argumentó que el Juzgado no podía realizar un decreto parcialmente anticipado; o se decretaban todas, conforme al párrafo del artículo 372 del Código General del Proceso, o no se anticipaba ninguna, según el diseño de las dos audiencias que implementó esa codificación. A su entender, la solución híbrida del auto impugnado compromete la igualdad procesal de las partes e inclina la balanza de armas a favor del demandante.

Similar crítica elevó respecto de la interpretación que el Juzgado hizo del pedimento probatorio, arguyendo, en síntesis, que no podía mutarlo del informe a la exhibición, ya que la solicitante no indicó de forma detallada, individual ni específica los hechos que pretendía probar, ni menos podía suplirlos el Juzgado con desmedro del debido proceso de las demás partes.

Finalmente, adujo que la previsión especial del artículo 583 del Estatuto Tributario impedía la exhibición de los documentos de sus representados, y afectaba, por ahí mismo, su derecho a la intimidad económica.

3. Recurso de la Sra. María Doris Hurtado Muñoz, CDI Exhibiciones S. A. S. y DH Inversiones. En memorial de catorce de abril, el vocero de dichas demandadas también recurrió en reposición contra el auto descrito, secundando, en abreviatura, los dos últimos argumentos de sus copartes.

4. Réplica de la parte demandante. Surtido el traslado que prevé el parágrafo del artículo 9 de la Ley 2213 de 2022, y estando dentro del término, el apoderado de la actora se pronunció en favor del auto confutado.

A su inteligencia, la adecuación probatoria del Juzgado respondió al deber procesal contemplado en el numeral 4.º del artículo 42 del Código General del Proceso, con lo que la exhibición se tornó en una prueba de oficio, según el artículo 169 *eiusdem*, cuyo tenor literal prohíbe cualesquiera recursos.

Defendió el decreto de la exhibición con el argumento de que los acápite del libelo genitor, particularmente los de hechos y fundamentos, satisfacen los requisitos del artículo 266 de la codificación, y que además denotan su pertinencia y utilidad para demostrar qué capacidad financiera tenían las sociedades demandadas al instante de la cadena adquisitiva de las acciones objeto de controversia.

Seguidamente argumentó que el carácter reservado de la información financiera y tributaria no resultaba oponible a las autoridades judiciales, según el artículo 27 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al cual razonamiento invocó el ejemplo de la historia clínica. Sobre el caso de los papeles de comercio, refirió que el artículo 63 del Código de Comercio permite su exhibición según y en los términos de la codificación procesal civil.

En lo referente a la solicitud de sentencia anticipada, consideró que esta puede ser dictada en cualquier momento que el juez estime debidamente probada alguna de sus taxativas causales. Dictaminó, entonces, que las partes no podían intimarle al juzgador una decisión de su exclusiva órbita funcional.

5. Aclaración preliminar y procedencia de los recursos. Conviene aclarar desde el pósito que la prueba de exhibición no encaja exactamente en la clasificación de una prueba de oficio, como sugiere el vocero de la demandante, sino que respondió a una interpretación de la petición de parte.

Nuestro ordenamiento jurídico no rinde un culto a la forma. Le interesa mucho más la sustancia de las cosas que su nombre (Cons. Pol., arts. 2 y 228 / C. G. P., art. 11). Si un litigante elige cierto *nomen iuris* y luego expone una *figura* distinta, no es que su petición esté condenada al fracaso de ese viejo romano que perdió sus troncos por

no pedir árboles, vocablo que sí aparecía en las Doce Tablas¹. Corresponde al juez hodierno desestimar el rótulo y tramitar el contenido, según los principios generales que se resumen en los apotegmas *iura novit curia* y *da mihi factum dabo tibi ius*.

Aquí sucedió que el apoderado de la parte actora intituló sus apartados probatorios como «*prueba por informe*», pero exoró que las demandadas «*aportaran*» algunos documentos que estaban en su poder, y aclaró inmediatamente que no se los había pedido directamente por motivos de reserva legal (cfr. arch. 3.5 c. 1, pág. 30). Bien que aquel nombre remite a la regulación del canon 275 del Código General del Proceso, para el Juzgado era y continúa siendo claro *a prima facie* que el contenido apuntaba a la prueba de exhibición prevista los artículos 265 y ss. *eiusdem*.

Llanamente se trata, entonces, de una prueba de parte que este Juzgado no podía desechar so pretexto de rótulo discordante. Y sabido que interpretar no es decretar, no podría entenderse la exhibición documental como una prueba *ex officio*.

Corolario de lo anterior es que contra la decisión confutada sí proceden los recursos interpuestos, siguiendo la regla general del artículo 318, y no la excepción del inciso del artículo 169.

6. Al presente no aparece la necesidad de sentencia anticipada. Establecida la procedencia de los recursos horizontales, el primer problema que ocupa la atención es el que atañe a la emisión de sentencia anticipada, según lo alegado por el vocero judicial del señor Restrepo Duque y de Pafares S. A. S.

Rectamente señala el apoderado recurrente que la sentencia anticipada constituye una saludable innovación procesal que propende por mayor economía y celeridad en la solución de conflictos; y más que simple facultad del funcionario jurisdiccional, emitirla es su deber cuandoquiera que esté bastante probada una causal de las listadas en el artículo 278 del Código General del Proceso.

Dícese que la causal debe estar bastante demostrada porque la anticipación implica, comúnmente, el aniquilamiento de las oportunidades probatorias para esa parte desfavorecida con el fallo. El juez exige un altísimo grado de convicción sobre la excepción invocada para el efecto, y asomándose la duda, cumple proseguir con el recaudo probatorio hasta convencerse de ella o descartarla del todo.

Como expresó el auto recurrido, la sola existencia de un pacto transaccional no es suficiente para dictar la sentencia anticipada. Estima el Juzgado que es imperativo contrastar los alcances de ese acuerdo precedente con las pretensiones del trámite presente, y para ello, claro, ha menester averiguar tanto el contexto como el intento de las partes alrededor de la suscripción.

Y ese menester requiere, por lo menos, adelantar la audiencia inicial hasta la etapa de interrogatorios de parte. Si de allí en adelante resultare paladina la configuración

¹ Cfr. Gayo, Instituciones, Libro IV, Cap. 11.

de los medios exceptivos, bien cabrá proferir el fallo anticipado en aquel tiempo, lo que rectamente explicó el vocero no recurrente en el quinto acápite de su memorial.

En lo que atañe a las excepciones de legitimación ausente y de prescripción, basta al Juzgado anotar que todavía no las halla probadas.

La parte actora hace girar su legitimación y su interés sobre el eje de lo alegado en los hechos décimo, undécimo, duodécimo y vigésimo, o sea, que el señor Restrepo ocultó acciones al momento de transar con aquella y liquidar extrajudicialmente su sociedad patrimonial. Está argumentando, en últimas, que a la liquidación subyació alguna especie de dolo, por manera que debería adicionársele o complementársele con la inclusión de las acciones pretermitidas.

Al caso así planteado por la demandante no parece aplicable el término prescriptivo del artículo 8 de la Ley 54 de 1990. Ya la liquidación se hizo, al menos en el papel. Lo que ahora se pretende es allanar el camino para una eventual alegación de cosa juzgada fraudulenta o aparente, basada, quizá, en el artículo 1824 del Código Civil, puesto que no puede existir verdadera cosa juzgada sobre la sociedad patrimonial si la transacción no incluyó –piensa la actora– todos los bienes afectos a ella.²

Es sabido que una pretensión de este talante no se regiría por el término precitado, sino por los términos generales del Código Civil. En consecuencia, para el Juzgado aún no refulge la prescripción que con tan claros ojos ve el demandado, claro está, sin perjuicio de lo que resultare probado más adelante.

7. El decreto probatorio fue oportuno. Frente a la inconformidad sobre el decreto «híbrido» de las pruebas, advierte el Juzgado que procedió de la manera reseñada en pos de los principios procesales de celeridad y eficiencia.

Rememórese que es deber del juez velar por la rápida solución del pleito y procurar la mayor economía procesal (C. G. P., art. 42-1). Con tal hálito, puede tomar y ejecutar las medidas que estime conducentes a tal efecto, siempre y cuando no se vulneren los derechos de las partes e intervinientes en el proceso.

El vocero del señor Restrepo Duque dibujó un cuadro preciso del diseño que de la oralidad logró el Código General del Proceso: en principio, hay dos audiencias, una para decretar las pruebas (art. 372) y otra para practicarlas (art. 373); pero si estimare el juez que entrambas cosas caben en una, puede concentrarlas, previo decreto de las pruebas por auto escrito.

La codificación, es cierto, no consagró el sistema «híbrido» que critica el recurrente. Esta mixtura surgió de la larga práctica judicial en torno al caso intermedio: cuando no es razonablemente posible reunir todas las pruebas en una sola audiencia, pero

^{2 2} Y esta es sólo una de las posibilidades que el apoderado de la parte demandante delineó en su réplica a las excepciones (arch. 3.5 c. 1, págs. 17-21). Digna de notar, también, es la posibilidad de estar preparando la senda a pretensiones indemnizatorias o de responsabilidad civil.

sí es factible e incluso deseable anticipar ciertas pruebas, cuya práctica, enseña la experiencia, resultaría engorrosa o dilatoria entre una y otra vista pública.

Puesto en ese medio, el Juzgado se ha hallado frecuentemente ante dos opciones: o dilata el espacio entre las dos audiencias o acelera el decreto de ciertas pruebas. Naturalmente que los sobredichos principios prefieren la segunda, y por esta razón se ha hecho uso de ella, opinando que el canon 12 del Código General del Proceso autoriza al juez a suplir los espacios inciertos de la forma que más encaje al espíritu general de la legislación.

Pues bien, la exhibición decretada se refiere a un gran número de documentos que las demandadas tendrían que reunir en un corto periodo de tiempo, si se dispusiese su recolección entre ambas audiencias, y que ni el Juzgado ni un eventual experto podría auscultar seriamente en la estrechez de un solo encuentro. Fue con el ánimo de facilitar su recolección y de precaver tres audiencias que se procedió al decreto anticipado, lo cual no parece lesivo de los derechos procesales de los recurrentes, máxime que quienes deben exhibir los documentos solicitados son los mismos llamados a resolver el interrogatorio exhaustivo que obligatoriamente debe practicar el juez.

Si no se apresuró el decreto de las exhibiciones pedidas desde el extremo opositor, es porque no reunían los ribetes de complejidad a que se ha hecho referencia. Eso de que el descubrimiento prematuro y unilateral de tales documentos conllevaría a la afectación de la igualdad procesal de las partes, es argumento defectible, porque la simetría de armas ya se satisfizo íntegramente en las respectivas fases que tuvo cada parte para pedir sus pruebas. Ver la exhibición no impedirá la recepción de la prueba pedida por los demandados ni mucho menos cambiará su contenido, y pues quien decide es el juez, y a éste cumple valorarlas armónica y conjuntamente, nada interesa que perciba unas pruebas primero que otras.

8. La petición reúne los requisitos generales de la exhibición. Ya se tiene dicho en precedencia que el Juzgado sí podía interpretar la petición de la demandante y tramitarla de acuerdo con su genuino sentido (cfr. § 5).

Resta advertir que la petición originaria, aun pese al rótulo discordante, sí satisfacía los requisitos del artículo 266 del Código General del Proceso para la exhibición de documentos. El quinto apartado de la respuesta a las excepciones (arch. 3.5, pág. 2, «*documentales en poder de la parte demandada*»), considerado en correspondencia con el segundo acápite de los fundamentos jurídicos, señala el propósito de comprobar la ausencia de movimientos económicos en relación con los actos que la solicitante considera simulados, así como su capacidad económica para efectuarlos, listando específicamente cuáles documentos quiere ver exhibidos de cada parte.³

³ Aquí el Juzgado acompaña la postura del vocero de la demandante, según la cual no es imperativo que la información esté contenida en el acápite de pruebas. Comoquiera que la codificación no contempla fórmulas sacramentales en este punto, sino solamente que se expresen los hechos a demostrar, parece admisible que la información esté contenida en otros puntos del libelo, siempre y cuando se referencien los unos a los otros, o la sindéresis permita relacionarlos sin mayor dificultad.

Bien es sabido, además, que el éxito de la pretensión simulatoria impone una carga probatoria exigente sobre los hombros de quien la alega, usualmente estructurada a partir de la verificación de otros hechos indiciarios del *animus simulandi*. Avocada la actora a tal esfuerzo demostrativo, considera el Juzgado que la exhibición guarda observancia de los requisitos generales de pertinencia, utilidad y conducencia.

9. Sobre la reserva legal de los documentos a exhibir. Hasta aquí se mantiene la validez *in abstracto* de la exhibición decretada. Ahora incumbe analizar en detalle los reparos de los recurrentes frente a la reserva de los documentos *in concreto*.

En su orden, el Juzgado considerará (i) los estados financieros y sus notas; (ii) las declaraciones de renta; y (iii) la copia de los libros de contabilidad.

9.1. Los estados financieros no están sometidos a reserva. Es paladino que los estados financieros no son por sí mismos objeto de reserva. Ello fluye rápidamente de los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995: aquél establece el deber jurídico de las «*sociedades*» de «*difundir*» los estados financieros de propósito general al final de cada ejercicio; éste regula su publicidad, precisando de que se «*expedirá copia de tales documentos a quienes lo soliciten*».

Claramente es posible que algunos anexos de los estados financieros sí contengan datos sensibles de la sociedad y, por tanto, sea información de carácter reservado. En estos casos, empero, el artículo 27 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo⁴ torna la reserva inoponible a la justicia, siendo su obligación asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.

En definitiva, el Juzgado concluye que la exposición de estos documentos no afecta el derecho a la privacidad económica de las sociedades demandadas, toda vez que fue el mismo legislador quien dispuso su publicidad.

9.2. Las declaraciones de renta sí están sometidas a reserva. No ocurre así con las declaraciones de renta, cuya publicación está expresamente limitada por fuerza del artículo 583 del Estatuto Tributario, salvo orden de la justicia penal.

Aquí no tiene cabida la inoponibilidad del artículo 27 del CPACA, como argumentó el apoderado de la demandante, porque entre esta norma y aquella existe un grado diferente de especialidad. La codificación administrativa cobija de manera genérica los datos referentes a la información financiera, mientras que la tributaria exceptúa específicamente las declaraciones de renta.

La ley especial prevalece sobre la general. Atendiendo este principio hermenéutico, el Juzgado concluye que le asiste razón a la inconformidad de los recurrentes, con lo que repondrá el auto cuestionado sobre este punto.⁵

⁴ Aplicable en virtud de los artículos 32 y 33 *eiusdem*, considerando la obligación de depositar todos los estados financieros en la Cámara de Comercio.

⁵ La comparación del apoderado activo con la historia clínica resulta defectible, porque respecto de esa información sí hay una norma que permite *expressis verbis* el acceso de las autoridades judiciales, que

No sobra aquí anotar que la sociedad DH Inversiones S. A. S. ya allegó sus propias declaraciones de renta (F-110) en los años de dos mil dieciocho, diecinueve y veinte, invocándolos como pruebas de su contestación (arch. 2.8). Dado que los particulares tienen la facultad de renunciar a las reservas estatuidas a su favor, de conformidad con el canon 15 del Código Civil, el Juzgado apreciará tales documentos tributarios al examinar el fondo de este asunto, si fueren decretados como pruebas, claro está.

9.3. La reserva de los libros de contabilidad puede levantarse. En principio, los libros y papeles están amparados por la reserva descrita en el canon 61 del Código de Comercio. No obstante, es la misma disposición la que trae su propia excepción, estableciendo que podrán examinarse «*mediante orden de autoridad competente*».

Semejante orden judicial debe acompasarse a los artículos 63.4 y 65 *eiusdem*, que a su vez remiten a los cánones 264 y 268 del Código General del Proceso.

Un examen conjunto de dichas disposiciones permite extraer que los jueces civiles pueden, de oficio o a petición de parte, disponer la exhibición parcial de los papeles de comercio, siempre que ella se limite a los asientos que guarden alguna relación necesaria con el objeto del litigio.

Considera el Juzgado que la exhibición está suficientemente delimitada y confinada a los años en que supuestamente ocurrieron los hechos de la demanda, con lo que no está vulnerando la proscripción de la exhibición general. En ese cuadro temporal es que se moverá la exhibición decretada, y claro, el Juzgado ejercerá en audiencia el debido control para asegurar que el examen se limite a los hechos anteriormente aludidos en el acápite octavo de esta providencia.

Así concluye, entonces, que los reparos de este punto son infundados.

10. Sobre la conducta procesal de las partes. Bien que lo dicho en precedencia resulta suficiente para resolver los recursos propuestos, el Juzgado toma la debida nota de una última circunstancia, y es que cada extremo expuso ciertas críticas con respecto de la conducta del otro.

Sobre la prueba extraprocesal que actualmente se adelanta ante el Juzgado Veinte Civil Municipal, según alegó el vocero del señor Restrepo Duque, basta anotar que el precedente de una autoridad inferior nunca vinculará al jerárquicamente superior. Cada juzgador tiene discreta autonomía para interpretar las leyes, y este Juzgado ya explicó con suficiencia sus propias razones para acceder a la exhibición.

Sobre la defensa conjunta que supuestamente existe entre los demandados, según alegó el vocero de la demandante, basta por ahora anotar que ninguna norma limita

es el numeral 4.º del artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, interpretado en correspondencia con los artículos 34 de la Ley 23 de 1981 y 27 del CPACA. Con la declaración tributaria ocurre justamente lo contrario; existe norma especial que limita el acceso de la especialidad civil.

o prohíbe que los jurisperitos de una misma orilla procesal se comuniquen entre sí para preparar la defensa técnica de sus representados.

Lo anterior es suficiente para los estrechos alcances de este recurso. Con todo, se tendrá en cuenta lo expuesto por una y otra parte cuando sea el momento procesal oportuno para derivar indicios de su conducta, si acaso resultare posible, conforme al artículo 241 del Código General del Proceso.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO

Ambos apoderados del extremo opositor pidieron aplazamiento de la audiencia que está programada para el día dieciséis de mayo en las horas de la mañana. Por una parte, el abogado Sebastián Cardona Hoyos puso por delante que se encontraría fuera del país para esa fecha. Por otra, el abogado Johan Ellan Flórez Muñoz adujo que para entonces tenía programada una actividad evaluativa en la Universidad de Medellín.

Se opuso el vocero de la parte demandante, arguyendo, en síntesis, que subyacía un ánimo dilatorio al aplazamiento común de los demandados; y que, en todo caso, las pruebas allegadas no resultaban suficientes al efecto.

Ahora bien, el Juzgado aceptará la justificación de los apoderados, pues, contrario a lo argüido por el apoderado de la actora, sí hallan suficiente respaldo en los documentos acompañados: (i) aunque el tiquete de vuelo se compró en la fecha del auto, consta que la reserva ya estaba programada desde el nueve de marzo; (ii) en la plantilla de asistencia sí aparece la firma digital del abogado-profesor, y está expresamente referida al mes de abril en la esquina superior derecha.

De conformidad con el numeral 3.º del artículo 372 del Código General del Proceso, será llegado el caso de reprogramar la fecha de la audiencia inicial.

Revisada la agenda del Despacho, sin embargo, se percibe ya está ocupada de tal manera que no es posible programarla en otra fecha más cercana ni dentro de los diez siguientes a la que ya estaba fijada. La nueva calenda será fijada de acuerdo con las circunstancias, en la más razonablemente temprana oportunidad.

Por todo lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO. Reponer parcialmente el auto impugnado, en el sentido de rechazar la exhibición de las declaraciones de renta de los demandados. En todo lo demás se mantiene incólume.

SEGUNDO. Reprogramar la fecha de la audiencia inicial para el **16 de junio de 2023 a las 9 am.**

TERCERO. Apercibir a las partes y a sus apoderados que en ningún evento podrán exorar otro aplazamiento, según el numeral 3.º del artículo 372 del Código General del Proceso.

3

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

Beatriz Helena Del Carmen Ramirez Hoyos

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 011

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad54862289ec4fbc0f3087f3e4829086d7f7c37e1c49d83ccc5d4b0a5cc52ca**

Documento generado en 08/05/2023 02:24:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>